



Los resultados reflejan un profundo descontento de los españoles con la fiscalidad que soportan.

## Barómetro fiscal: ¿Pagamos lo que debemos?

**H**ace unas semanas el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) publicaba su informe *Opiniones y Actitudes de los españoles 2014*—conocido como Barómetro Fiscal—, un prestigioso estudio que el organismo público realiza para conocer las opiniones y las actitudes de los ciudadanos ante la fiscalidad.

CARLOS CAPA

Los resultados reflejan un profundo descontento de los españoles con la fiscalidad que soportan, una escasa satisfacción con la gestión de los servicios públicos que se financian con ella y su percepción de creciente aumento del fraude fiscal.

**Escasa satisfacción.** Así, el 70 por ciento de los entrevistados cree que paga más de lo que recibe y un 41 por ciento no está satisfecho con

**El 65 por ciento considera que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles**

ningún servicio público. Es, cuando menos, llamativo que solo el 27,1 por ciento de los españoles considere que la oferta pública de servicios y prestaciones justifica bastante o mucho el pago de los impuestos. En lo que se refiere al fraude 9 de cada 10 tienen la percepción de que se ha incrementado.

El análisis los datos sugiere, según el Barómetro Fiscal, que la ciudadanía no encuentra en la oferta pública de servicios y prestacio-

## Servicios públicos más utilizados

Los servicios sanitarios han sido utilizados por una proporción mayor de hogares españoles (90%); les siguen las infraestructuras y los transportes públicos, con una utilización del 88 y el 73 por ciento, respectivamente. En un nivel intermedio se sitúan los servicios educativos, utilizados por un 47 por ciento de los hogares. Y en un escalón inferior se encuentran las pensiones de jubilación (32%), el seguro de desempleo que ha sido utilizado por el 18 por ciento, y los servicios sociales utilizados por el 14 por ciento de los hogares españoles. Las pensiones por enfermedad o invalidez han sido percibidas por la menor proporción de hogares, el nueve por ciento.



nes una justificación al pago de sus impuestos, observándose un porcentaje cada vez más elevado de la población, que opina que la prestación de servicios no justifica el pago de impuestos.

El servicio de pensiones por jubilación y el seguro de desempleo obtienen la peor de las puntuaciones. El primero obtiene una valoración negativa del 65 por ciento de los encuestados y un 63 por ciento el segundo.

Por el contrario, los transportes (68%), las infraestructuras (67%) y la sanidad (63%) son los servicios con los que los usuarios se sienten muy o bastante satisfechos.

En la franja media se encuentran Educación, con un 62 por ciento de satisfacción y Servicios Sociales con un 55 por ciento.

El estudio del IEF también indica que las infraestructuras y la sanidad están especialmente bien valoradas por los usuarios de mayor edad y que las mujeres se sienten más satisfechas que los hombres con respecto a los servicios sociales y los transportes. Los empresarios por su

## La mayoría de la población encuestada considera que la impunidad de los defraudadores es la principal causa del fraude fiscal en nuestro país

parte son quienes están más satisfechos con el seguro de desempleo.

Para la mayoría de los ciudadanos los distintos servicios públicos y prestaciones sociales que conforman la oferta pública financiada con impuestos, son útiles y necesarios. Sin embargo, esta consideración no evita críticas con respecto al modo en que la Administración la gestiona e, incluso, con respecto a la utilización que hacen los usuarios de la misma. De este modo un 38 por ciento de los entrevistados afirman

no haber notado mejoras en ninguno de los servicios y prestaciones sometidos a evaluación. La sanidad y las infraestructuras son los servicios que han mejorado más en los últimos cinco años, en opinión del 18 por ciento y 17 por ciento de los entrevistados, respectivamente. En una tercera posición se encuentran los transportes (14%). Un poco más lejos se encuentran la educación (6%) y los servicios sociales (4%).

**Fraude fiscal.** El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indicó durante 2015 que una de las principales preocupaciones fue la corrupción. El barómetro fiscal, en esa dirección, también señala al fraude fiscal como una inquietud generalizada en la población. De este modo, el 91 por ciento de la población encuestada percibe un aumento de la conducta defraudadora, frente al nueve por ciento que considera que el fraude fiscal ha disminuido en la última década. También hay que señalar que la percepción negativa es común a todos los

El 70 por ciento de los entrevistados cree que paga más de lo que recibe.

## ¿Y en el resto de Europa qué ocurre?

Tradicionalmente, y a pesar de que muchos españoles no saben muy bien cómo funciona la fiscalidad en Europa, la mayoría de los que tienen opinión al respecto piensa que la relación entre los impuestos que se pagan y los servicios y prestaciones que se reciben en España no está al mismo nivel que en otros países de la Unión Europea. Un 67 por 100 de la población opina que la relación entre impuestos y prestaciones es peor en España que en otros países europeos.

La realidad es que, según Eurostat, la presión fiscal de España en 2014 fue del 37,8 por ciento del PIB, unos siete puntos menos que la media de la UE. En los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia o Noruega, este valor es de aproximadamente el 50 por ciento.

El *Índice de Competitividad Fiscal* que publica anualmente la fundación estadounidense Tax Foundation —especializada en asuntos tributarios— concluye que el sistema vigente en España es el quinto peor de Europa y el sexto peor de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según este mismo estudio los países con una legislación fiscal más competitiva son, por este orden: Estonia, Nueva Zelanda, Suiza y Suecia. En el furgón de cola de la competitividad fiscal están Francia, Italia y los Estados Unidos de América.

Otra cosa es el nivel de satisfacción interna que tienen los ciudadanos con sus sistemas fiscales en relación con la gestión de los servicios públicos. Si en España más de dos tercios de la población cree que paga más de lo que recibe del Estado, Noruega se sitúa en el primer puesto del Índice de Desarrollo Humano (*Human Development Index*) de las Naciones Unidas. Los propios noruegos, a pesar de soportar una presión fiscal cercana al 56 por ciento, —el tipo medio del IVA es del 25 por ciento— valoran en el Índice de Calidad de Vida de la OCDE su nivel de satisfacción con un 7.4, una nota más alta que el promedio de los países de la organización, que se sitúa en 6.6. En España nos quedamos en 6.5.

colectivos pero destaca en los grupos de asalariados, profesionales e inactivos, ya que más de un 80 por ciento de los mismos respectivamente cree que el fraude fiscal ha aumentado algo o bastante.

Analizando los datos del barómetro fiscal desde 2004 se observa que la mayor parte de los ciudadanos considera que el fraude fiscal ha sido una constante en la última década y se pone de relieve el sentimiento pesimista que vienen experimentando los ciudadanos desde 2009, coincidiendo con los inicios de la crisis. Es destacable que el 65 por ciento considere que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles. También resalta la opinión extendida (un 70 por ciento de los encuestados) de que hay colectivos que defraudan más que

otros. Entre los habitualmente evasores mencionan a los empresarios, en primer lugar, seguidos a bastante distancia de los profesionales liberales y de los trabajadores autónomos, mientras que los asalariados se consideran poco defraudadores.

El descrédito y malestar general del ciudadano español hacia los responsables financieros y políticos, tal y como vienen poniendo de manifiesto las encuestas del CIS de los últimos años, también se plasma en el barómetro fiscal. Más de la mitad de los entrevistados opina que son los bancos y la clase política los colectivos que más defraudan al Estado.

Entre las causas la mayoría de la población encuestada considera que la impunidad de los defraudadores es la principal causa del frau-

## El servicio de pensiones por jubilación y el seguro de desempleo obtienen la peor de las puntuaciones

de fiscal en nuestro país, pero no la única ya que también se señalan como factores la falta de honradez y conciencia cívica, la ineficacia en la lucha contra el fraude o la presión fiscal excesiva. La inadecuación de los impuestos a la oferta pública de servicios y prestaciones y la necesidad de “trampear” para salir adelante, son dos causas de persistencia del fraude fiscal, aunque con menor importancia relativa que las anteriores.

Los españoles creen también que mantener actividades económicas ocultas a Hacienda y a la Seguridad Social es el tipo de fraude más perjudicial para la sociedad en su conjunto. Le siguen, a bastante distancia, los empresarios que no pagan IRPF y las empresas que no pagan parte del Impuesto sobre Sociedades. En una posición intermedia se colocan la no presentación de la declaración de la renta y los dos fraudes relacionados con el IVA. Por último, con un porcentaje inferior al uno por ciento se encuentran el resto de fraudes tales como la evasión fiscal y la corrupción política.

Casi siete de cada diez entrevistados manifiesta que no encuentra justificación alguna al fraude fiscal, pero casi un tercio de los ciudadanos justifica, de un modo u otro, la conducta defraudadora. No obstante, este descargo tiende a basarse en un argumento autoexculpatorio: son las circunstancias las que obligan a defraudar para salir adelante para el 22 por ciento frente a los que opinan que lo normal es evadir los impuestos: el siete por ciento. ●



FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS,  
PROFESOR DEL IE BUSINESS SCHOOL

## Esquizofrenia fiscal

**E**l 70 por ciento de los españoles cree que paga más impuestos que servicios recibe del Estado. Además el 80 por ciento considera que el fraude ha aumentado en las últimas décadas. Estos son los datos que repite insistentemente el Barómetro Fiscal y que la opinión pública da por ciertos. Reflejan un estado de opinión indudable, pero que no se corresponde con la realidad, como voy a intentar argumentar en este artículo.

Los estados de opinión surgen de la realidad, pero no reflejan necesariamente la realidad. No debería sorprender a nadie que una coyuntura política dominada por la crisis económica y la corrupción genere la sensación de que vivimos en un país donde el fraude fiscal es rampante. Pasa lo mismo con otros delitos –violencia de género, información privilegiada o prácticas anticompetitivas– cuya persecución aumenta la percepción pública de que son una característica nacional. Hoy se habla más de fraude fiscal, porque se persigue, se denuncia y se castiga. Antes, era todo silencio y complicidad.

Pero además del clima político, y de la desconfianza tradicional del español ante la Administración y el poder, existen algunas razones institucionales, corregibles, por las que esa sensación de injusticia fiscal es mayor en España. Citaré dos:

Queremos servicios públicos equiparables a los del mejor y más desarrollado Estado del Bienestar del mundo, pero queremos también pagar impuestos del Tercer Mundo

la distribución de competencias fiscales en el Estado de las Autonomías y la falta de transparencia del coste de los servicios públicos. Con independencia del debate sobre financiación autonómica, lo cierto es que la separación entre la institución que recauda, el gobierno central y la Adminis-

tración Tributaria, y la que gasta y distribuye, las Comunidades Autónomas responsables del 80 por ciento del gasto público y de la práctica totalidad del gasto social, no es la mejor manera de generar en los ciudadanos conciencia tributaria, sensación de pertenencia y corresponsabilidad. Hacienda no podemos ser todos si a mí me pagan otros las pensiones, o si con mi dinero se paga la salud de otros. Un tema muy complejo pero que sin duda requiere una segunda lectura ahora que parece que vamos a reescribir los consensos de la Transición.

La cultura del gratis total está tan extendida en España que pocos son los ciudadanos que saben o quieren saber el coste de los servicios que reciben del Estado. Llevo años proponiendo sencillas medidas de transparencia que contribuirían a levantar el velo de silencio que ha permitido que se dispare el gasto público a la vez que crece la sensación de su

injusticia. Si todos los alumnos españoles recibieran con su matrícula una carta recordándoles el coste de la plaza escolar o universitaria que ocupan y el precio que pagan, es decir una notificación oficial de la beca que reciben, quizás cambiaría esa percepción. Si cada vez que vamos a un hospital nos extendieran una factura proforma del coste incurrido a la Seguridad Social, a lo mejor abusábamos menos de las urgencias. Ya no digo que el ciudadano adelante el pago y luego pida el reembolso, como en Francia, para que no me acusen de ultra. Si por ejemplo cada vez que vamos al cine o al teatro, la entrada llevara impresa la subvención recibida a lo mejor cambiábamos de opinión. Si la tarifa eléctrica especificara las políticas ambientales, sociales o industriales que financia, puede que pensáramos si estamos dispuestos a pagarlas. Hay muchos más ejemplos, pero no me atrevo siquiera a mencionarlos porque me gustaría poder seguir yendo a tomar café al bar de siempre.

Ese velo de silencio se extiende a todas las administraciones públicas. Los mismos ciudadanos que se indignan de la suciedad de las calles son los mismos que piden a gritos una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles. Y la receta para cuadrar el círculo imposible es siempre la misma: que paguen los ricos, que luchen de verdad contra el fraude. Ricos que son siempre otros, fraude que nunca cometemos nosotros. Y cuando desde el Ministerio de Hacienda se adoptan medidas de control o inspección, y en esta administración se han tomado varias muy polémicas como la restricción al uso de efectivo, la declaración de ingresos y patrimonio en el extranjero o la limitación al uso de sociedades profesionales, el apoyo popular ha sido perfectamente describable, basta con ver la valoración que el CIS otorga al Ministro de Hacienda.

Los españoles padecemos de esquizofrenia fiscal. Queremos servicios públicos equiparables a los del mejor y más desarrollado Estado del Bienestar del mundo, pero queremos también pagar impuestos del Tercer Mundo. Queremos ser Dinamarca pero sin el IVA generalizado al 27 por ciento para todos los bienes sin exclusiones de ningún tipo. Y amparados en nuestro infantilismo por un sistema político que vive en campaña electoral permanente, nos consolamos echándole la culpa al fraude o al austericidio impuesto por la Europa teutónica. Cualquier cosa antes de reconocer que somos el único país de la Eurozona con déficit primario y estructural, y que el sistema fiscal no da más de sí. No hay precedentes históricos de ningún país que haya ingresado tres puntos del PIB con medidas de lucha contra el fraude, sin utilizar mecanismos de copago y sin ajustar las pensiones. Podemos seguir culpando al mal tiempo de las desgracias de la Armada invencible, pero lo cierto es que nuestro sistema fiscal necesita una reforma en profundidad para ingresar más y mejor, para gastar menos y mejor. Y eso solo será posible con un amplio acuerdo social que olvide la demagogia y le diga al ciudadano lo que no quiere oír.